

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección: CUARTA

Auto núm. /

Fecha del auto: 21/01/2021

PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES Num.: 1

Procedimiento N°: REC.ORDINARIO(c/d)-19/2021

Fallo/Acuerdo: Auto no ha lugar Medida Cautelarísima

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero

Procedencia: T.SUPREMO SALA 3A. SECCION 4A.

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Molina
López

Transcrito por:

Nota:

Resumen

Medida cautelarísima de suspensión solicitada en la interposición del recurso contra acuerdo 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León sobre restricción de aforo en lugares de culto religioso, por situación de estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. No se justifican razones de especial urgencia para la adopción sin audiencia de la parte contraria.

PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES Num.: 1

Procedimiento Num.: REC.ORDINARIO(c/d) - 19/ 2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Molina
López

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección: CUARTA

Auto núm. /

Excmas. Sras. y Excmos. Sres.

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

D. Luis María Díez-Picazo Giménez

Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. José Luis Requero Ibáñez

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 21 de enero de 2021.

Esta Sala, con la composición arriba indicada, ha visto la solicitud de medida cautelarísima solicitada con la interposición de recurso contencioso-administrativo (artículo 135 de la LJCA) formulada por la Procuradora doña Pilar Pérez Calvo, en nombre y representación de la Asociación de Abogados Cristianos, bajo la dirección letrada de doña Polonia Castellanos Florez, en

relación al acuerdo 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, sobre medida de restricción de aforo en lugares de culto religioso, en el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/20220, de 25 de octubre (Boletín Oficial de Castilla y León de 16 de enero de 2021).

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero.

HECHOS

PRIMERO.- En el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, comparece ante la Sala la procuradora doña Pilar Pérez Calvo, en nombre y representación de la Asociación de Abogados Cristianos, bajo la dirección letrada de doña Polonia Castellanos Florez.

Se solicita la medida cautelar de suspensión, junto con la interposición del recurso contencioso-administrativo, con invocación del art. 135 LJCA, sin dar audiencia a la parte contraria, suspensión que se concreta «[...] únicamente en lo que respecta a la limitación de los lugares de culto sin tener en cuenta su aforo [...]», dado que, se dice «[...] así expresamente lo autoriza el artículo 135 de la Jurisdicción, interesando esta parte se curse la suspensión del modo referido, dado que la devolución (*sic*) se producirá en los próximos días [...]» (pág. 12 del escrito de interposición y solicitud de medida cautelar).

SEGUNDO.- Como fundamentos de su pretensión invoca la asociación compareciente que el acuerdo recurrido, en cuanto impone un número máximo de 25 asistentes a las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos, con independencia del aforo máximo permitido (un tercio de su aforo) establece una restricción injustificada y desproporcionada, que vulnera el principio de igualdad, la libertad religiosa y el derecho de reunión.

Argumenta que la no adopción inmediata de la medida cautelar «[...] la actividad administrativa recurrida ocasionaría perjuicios irreparables a la recurrente [...]» (pág. 11 del escrito de solicitud de la medida).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La pretensión de que se ha dado cuenta en el extracto de antecedentes se formula al tiempo de la interposición del recurso contencioso-administrativo, y solicita, al amparo de lo que autoriza excepcionalmente el artículo 135.1 LJCA, que se conceda, en su caso y sin audiencia de la parte contraria, la medida cautelarísima al amparo del art. 135 LJCA, de «[...] la SUSPENSIÓN DEL ACUERDO 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, únicamente en lo que respecta a la limitación de los lugares de culto sin tener en cuenta su aforo [...]» (pág. 13 del escrito de interposición del recurso y solicitud de medida cautelar).

SEGUNDO.- El apartado 3 del acuerdo del Presidente de la Junta de Castilla y León, cuya suspensión se pide dispone lo siguiente:

«[...] De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos podrá desarrollarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, siempre que, respetándose las medidas generales de prevención, no se supere un tercio de su aforo, con un máximo de 25 personas».

Ahora bien, el primer aspecto que hemos de resolver es si procede resolver sobre la medida cautelar de suspensión solicitada al amparo del art. 135 de la LJCA, en la forma que pretende la parte recurrente, es decir sin audiencia de la parte contraria.

La parte actora formula su pretensión cautelar respecto a la previsión contenida en el apartado 3º del acuerdo, cuya impugnación formaliza sin mas sustento legal que la invocación del art. 135 de la LJCA, sin ningún otro argumento que abone la excepcionalidad de adoptar la medida sin dar oportunidad de alegaciones a la parte contraria. La necesidad de resolver sobre la pretensión procesal cautelar pese a la suspensión de plazos procesales no implica por sí misma la urgencia de adoptar la medida cautelar. Esta urgencia, que está en la base de la aplicación del art. 135 LJCA, debe sustentarse en circunstancias específicas de protección del derecho o interés invocado. Así las cosas, no advertimos que exista la urgencia perentoria de pronunciarnos sobre la medida cautelar solicitada, y que, como hemos señalado, es presupuesto indispensable para la resolución sobre medidas cautelares "*inaudita parte*" al amparo del art. 135.1 LJCA. En definitiva, ni los argumentos que el recurrente expone en cuanto al rechazo del acuerdo recurrido, ni su razonamiento sobre el "*periculum in mora*", como requisito general de la medida cautelar solicitada, son argumentos que abonen la inaplazable urgencia de adoptar la medida cautelar sin dar audiencia a la Administración demandada.

Cumple, en definitiva, no apreciar las razones de especial urgencia que exige el art. 135.1 LJCA, todo ello sin perjuicio de que se dé curso a la tramitación de la pieza ordinaria de medidas cautelares conforme al art. 131 LJCA, tal y como dispone el art. 135.1.b LJCA.

TERCERO.- No procede hacer pronunciamiento de costas, por no haberse ocasionado ninguna actuación procesal de contrario y no apreciarse temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto,

LA SALA ACUERDA:

- 1.- No acceder a la adopción de la medida cautelarísima de suspensión solicitada con la interposición de recurso contencioso-administrativo por la procuradora doña Pilar Pérez Calvo, en nombre y representación de la Asociación de Abogados Cristianos.
- 2.- Acordar la apertura de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares conforme al artículo 131 de la LJCA.
- 3.- No hacer imposición de las costas causadas en este incidente.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

